

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  
Magistrada Ponente

Auto - Ejecutivo	
EJECUTANTES	DARÍO DE JESÚS CATAÑO QUINTERO
EJECUTADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-004-2015-00020-01
TEMA	Auto que resuelve excepciones.
DECISIÓN	Confirma.

Medellín, once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021)

*Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.*

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento escrito, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a desatar el auto interlocutorio apelado, dentro del

presente proceso ejecutivo laboral conexo, promovido por el señor **DARÍO DE JESÚS CATAÑO QUINTERO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 030**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

### **I.- ANTECEDENTES**

Para lo que a esta decisión interesa, es preciso reseñar que el señor **DARÍO DE JESÚS CATAÑO QUINTERO**, actuando a través de apoderada judicial, formuló demanda ejecutiva laboral contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, para que se libre **MANDAMIENTO DE PAGO** a su favor, por los siguientes conceptos:

*“1. Por la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS (\$8.949.900.00), por concepto de retroactivo pensional, calculada desde el 19 de febrero de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2005.*

*2. Por la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (\$6.398.310.00), por concepto de incrementos pensionales por cónyuge e hijos menores de edad a cargo – liquidados en el periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2005 y hasta el mes de diciembre de 2009-*

*3. Por el valor que resulte de liquidar, a partir del mes de enero de 2010 el incremento sobre cada una de las mesadas ordinarias del demandante, en una suma equivalente al 14% y 7% de la pensión mínima legal mientras subsistan las causas que le dieron origen a su reconocimiento.*

*4. Por el valor de las COSTAS PROCESALES, aprobadas mediante auto del 13 de junio de 2011, dentro del proceso ordinario 2007-00492, esto es, por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$3.308.675.00).*

*5. Por el valor de la INDEXACIÓN de las sumas indicadas en los numerales 1, 2 y 3 de este escrito – liquidadas desde el 19 de febrero de 2005 y hasta el pago efectivo.*

*6. Por el valor de los INTERESES MORATORIOS, liquidados mes a mes, de acuerdo a lo regulado por la Superintendencia Financiera, sobre las sumas de dinero establecidas en el numeral 4 de este escrito, desde el 14 de junio de 2011 y hasta su pago efectivo.*

*7. Por el valor de las COSTAS PROCESALES ocasionadas con el presente proceso de ejecución.”*

Y como MEDIDA CAUTELAR, se solicitó el embargo de las sumas de dinero que la entidad tiene depositadas en la cuenta corriente N° 6528320209592 de Bancolombia.

Como hechos relevantes, narró que las referidas pretensiones derivan del incumplimiento de COLPENSIONES a las obligaciones que le fueron impuestas por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE MEDELLÍN, en sentencia del 4 de diciembre de 2009, confirmada en segunda instancia por este Tribunal de Distrito Judicial en sentencia del 27 de enero de 2011.

Mediante auto interlocutorio del 29 de agosto de 2017, el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, accedió a librar mandamiento de pago ejecutivo a favor del señor DARÍO DE JESÚS CATAÑO QUINTERO, por los siguientes conceptos:

- A) Por la suma de 8.949.900.00, por concepto de retroactivo pensional liquidado en la sentencia calculado entre el 19 de febrero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005, que deberá ser indexada desde el 19 de febrero de 2005 hasta el momento del pago o solución de la obligación.*
- B) Por la suma de \$6.398.310.00 por concepto de incrementos pensionales por cónyuge e hijos a cargo liquidados entre el 19 de febrero de 2005 y diciembre de 2009 que deberá ser indexada desde el 19 de febrero de 2005 hasta el momento del pago o solución de la obligación.*
- C) Por los incrementos pensionales causados en un 14% y 7% de la pensión mínima legal a partir del mes de Enero de 2010 y mientras subsistan las circunstancias que les dieron origen, más la*

*correspondiente indexación de las sumas generadas desde el 19 de febrero de 2005 hasta el momento del pago o solución de la obligación.*

*D) Por la suma \$3.308.675.00 por concepto de agencias en derecho (costas primera instancia), mas los intereses legales moratorios a la tasa del seis por ciento (6%) anual causados a partir del veintiuno (21) de Junio de 2011 y hasta que se efectuó el pago total de la obligación.-*

También se accedió a la MEDIDA CAUTELAR solicitada, y se limitó a la suma de \$35.450.000.00.

Mediante memorial de fecha 23 de febrero de 2018 (fls.158), el apoderado judicial de COLPENSIONES, allega copia de la resolución N° GNR-76623 del 14 de marzo de 2016 (fls.158 al 165), advirtiendo que través del citado administrativo la entidad ejecutada, dio cumplimiento total a la obligación impuesta en el proceso ordinario declarativo.

Efectuada la notificación correspondiente, la entidad ejecutada presentó su contestación a la demanda (fls.166 al 170), proponiendo como excepciones de mérito las que denominó: “*PRESCRIPCIÓN; PAGO TOTAL; COMPENSACIÓN; e IMPOSIBILIDAD DE LA CONDENA EN COSTAS*”.

## **II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

### **OBJETO DE ALZADA:**

En audiencia de resolución de excepciones, celebrada el 15 de noviembre de 2019, el JUEZ CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, DECLARÓ no probadas las excepciones de PRESCRIPCIÓN, PAGO Y COMPENSACIÓN formuladas por la apoderada judicial de la parte ejecutada COLPENSIONES, en consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución en los mismos términos del auto de fecha 29 de agosto de 2017 que libró mandamiento de pago contra COLPENSIONES.

También impuso las costas del proceso ejecutivo a cargo de COLPENSIONES, fijándole como agencias en derecho la suma equivalente al 7% del valor del crédito que se llegará aprobar en el sub lite.

Como fundamento de su decisión, estimó el juez de primer grado que la entidad demandada no logró probar el pago de los conceptos reclamados por el ejecutante, y sobre los cuales se accedió a librar mandamiento de pago, tampoco obra un depósito judicial en la cuenta del banco agrario donde se acredite el pago de las costas procesales.

En relación con los intereses legales previstos en el art. 1617 del Código Civil, indicó que estos no requieren de una sentencia judicial que los contenga, pues operan por ministerio de la ley, solo se requiere que se haya configurado una mora en el pago de la obligación impuesta, como efectivamente ocurrió en el sub lite.

En cuanto a la inembargabilidad de los recursos de la seguridad social, manifestó el juez de primer grado que tal excepción no es absoluta, como lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en aquellos casos donde está en juego los derechos pensionales de los afiliados.

Y finalmente, indicó el juez de primer grado, que en el sub lite no operó la prescripción de la acción propuesta por la parte ejecutada, pues la parte ejecutante alcanzo a interrumpir el fenómeno prescriptivo oportunamente, esto es, con la cuenta de cobro presentada el día 23 de mayo de 2012.

### **III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN**

La referida decisión fue recurrida en apelación, por la apoderada judicial de la parte ejecutada, quien refiere no estar de acuerdo con la decisión de continuar con la ejecución de los intereses legales previstos en el art. 1617 del CC, ya que su imposición a través de la analogía normativa no está permitida por tratarse de una norma sustancial, señalando además que este tipo de intereses no aplican sobre prestaciones del sistema de seguridad social.

Y finalmente se opone al valor de la condena por costas procesales, la cual considera desproporcionada, máxime que estos intereses fueron impuestos en virtud de una indebida analogía normativa.

### **Alegatos de conclusión:**

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal, la apoderada judicial de la parte ejecutada, Dra. CAROLINA RIVERA GÓMEZ portadora de la T.P. N° 225.143 del C.S. de la J., presentó escrito de alegaciones, solicitando se absuelva a la entidad de la totalidad de pretensiones formuladas, pues considera que no es admisible que el despacho ordene seguir adelante con la ejecución desconociendo la constitución de un título judicial a favor de la parte ejecutante el día 26 de abril de 2018, es decir COLPENSIONES ha asumido su carga procesal de pago mucho antes de la realización de la presente diligencia, y por ende no se puede ordenar doble pago respecto de esta acreencia que se tenía con la parte ejecutante.

Y que, al haberse realizado el pago de las costas procesales, mal se haría en ordenar el pago de unos intereses que ni siquiera están contenidos en el título ejecutivo.

A la referida apoderada judicial, se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario.

A su turno la apoderada judicial de la parte ejecutante, Dra. MARTHA YULIET MURILLO RAMÍREZ, expone en su escrito de alegaciones, que ninguna de las excepciones propuestas por la parte ejecutada se encuentra probada en la litis, al no haberse demostrado un pago total de la obligación; sin embargo, resalta que es pertinente tener en cuenta el memorial presentado ante este despacho en el que se advierte de un pago a la obligación ratificado por demandante Darío de Jesús Cataño Quintero, en el cual se aporta la relación de los valores girados por Colpensiones a su favor.

### **IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:**

Desatará la Sala el recurso de alzada interpuesto, tomando en consideración los puntos de inconformismo que sustentan dicho recurso, al tratarse de una

providencia judicial que al tenor de lo dispuesto por el artículo 65 del CPT y SS., es recurrible en apelación.

La cuestión jurídica a resolver en esta instancia judicial, se circunscribe a desatar la apelación presentada a instancias de la parte ejecutada, sobre el auto interlocutorio a través del cual se declararon no probadas las excepciones de prescripción, pago y compensación propuestas por la parte ejecutada, y se ordenó seguir adelante con la ejecución, y por ello la problemática a resolver, será determinar si la excepción pago debió haberse declarado probada en su totalidad en relación con los intereses legales previstos en el art. 1617 del Código Civil.

Sea lo primero, -a efectos de resolver lo pertinente-, recordar que, en el proceso ejecutivo conexo, el grado de semejanza que debe existir entre la parte resolutive de la sentencia ordinaria y la orden judicial de ejecución, es absoluta.

Tal exactitud funge como garantía de que la ejecución solo se adelantará por las obligaciones claras, expresas y exigibles que fueron impuestas en la sentencia resultante del proceso ordinario. Así, de un lado el título ejecutivo funge como garantía crediticia para el acreedor, ya que el mismo incorpora los derechos precisos que pueden hacerse exigibles por la vía ejecutiva, sin que pueda interpretarse con alcance restringido lo esencialmente contenido en el mismo; y al mismo tiempo, este comporta garantía para el deudor, quien conforme a la incorporación precisa y exacta del derecho, no podrá ser perseguido en sus bienes y eventualmente ejecutado en un juicio, por ninguna obligación o importe que no contenga el propio documento.

Ello por cuanto, la fuerza de ejecutividad patrimonial del título ejecutivo (sentencia ordinaria) en contra del deudor (vencido en juicio en el proceso ordinario), no alcanza a comprender una nueva disputa de orden social.

Ir más allá de las obligaciones contenidas en la sentencia ordinaria, indudablemente significaría desbordar el alcance del crédito que contiene la

providencia, y evidentemente ese ir mas allá situaría al sujeto de derechos en el escenario del proceso ordinario, y no del juicio ejecutivo.

Conforme a la jurisprudencia nacional, el “*que la obligación sea expresa, quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente. Que sea clara: Esto es, que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor). Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta*” (Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 22 de junio de 2001, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque, Radicado 44001-23-31-000-1996-0686-01(13436).

## CASO CONCRETO

A efectos de establecer el monto de lo adeudado en este caso, resultante de las obligaciones impuestas por la Judicatura a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, la Sala consultó las pretensiones reconocidas al señor DARÍO DE JESÚS CATAÑO QUINTERO en el título ejecutivo constituido por las sentencias de primera y segunda instancia de fechas 4 de diciembre de 2009 y 27 de enero de 2011, visibles a folios 63 al 83 y 104 al 109 del plenario.

En la sentencia de primer grado, se declaró que al señor DARÍO DE JESÚS CATAÑO QUINTERO, le asistía derecho a un **retroactivo** de la pensión de vejez calculado en la suma de **\$8.949.900** por el periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005, así como un **incremento** pensional por personas a cargo (cónyuge e hijos menores de edad), calculado en la suma de **\$6.398.310**, por el periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2005 y hasta el mes de diciembre de 2009, también se ordenó al ISS hoy COLPENSIONES a efectuar el pago de tales condenas con su correspondiente **indexación**, y a continuar pagando el incremento pensional por personas a cargo hasta que



subsistan las causas que le dieron origen, imponiendo las costas de primer grado a cargo del ISS.

Esta sentencia fue confirmada íntegramente en segunda instancia, absteniéndose este tribunal de distrito judicial de imponer condena en costas, y luego mediante auto del 13 de mayo de 2011 (fls.111) el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN efectuó la liquidación de costas procesales y agencias en derecho, fijando por este último concepto la suma de **\$3.308.675**, liquidación que fue aprobada mediante proveído del 14 de junio de 2011 (fls.112).

En cumplimiento a lo ordenado en esta providencia, COLPENSIONES expidió la resolución N° GNR-76623 del 14 de marzo de 2016 (fls.159 al 165), en la que se dispuso el pago de los siguientes conceptos y valores:

CONCEPTO	VALOR
MESADAS	\$ 8.054.910,00
MESADAS ADICIONALES	\$ 894.990,00
INCREMENTOS	\$ 8.107.535,00
INDEXACIÓN	\$ 3.997.453,00
DESCUENTOS EN SALUD	\$ 966.600,00
PAGOS ORDENADOS SENTENCIA	\$ 9.398.310,00
VALOR A PAGAR	\$ 26.486.598,00

Advirtiéndose en el ARTÍCULO SEGUNDO de la parte resolutive del citado administrativo lo siguiente: “... *La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 201604 que se paga en el periodo 201605 en la entidad bancaria SERVICIOS POSTALES 4-72 sucursal MEDELLÍN BELLO...*”.

Sin embargo, el citado acto administrativo se expidió cuando la demanda ejecutiva laboral conexa ya había sido presentada ante la oficina de apoyo judicial de Medellín (02-12-2014), y para la fecha en que fue aportada esta resolución por parte del apoderado judicial de COLPENSIONES (23-02-2018) ya se había librado mandamiento de pago contra dicha entidad.

El juez de primer grado, en la audiencia de resolución de excepciones llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2019, indicó que en el plenario no había prueba donde se acredite el pago total de tales conceptos, y mucho menos la existencia de un título judicial en el Banco Agrario (fls.201 – consulta realizada en el portal de depósitos judiciales), por el valor de las costas procesales y agencias en derecho dispuestas a favor del ejecutante; y que por ende debían declararse imprósperas las excepciones propuestas, especialmente la excepción de pago.

La apoderada judicial de la parte ejecutada COLPENSIONES, no recurrió lo resuelto en este sentido, solamente mostró su inconformidad frente a la decisión de continuar adelante con la ejecución por los intereses legales previstos en el art. 1617 del código civil, y la condena en costas procesales del proceso ejecutivo.

Es por lo anterior, y en atención al principio procesal de consonancia al que alude el art. 66-A. del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que esta Sala solo es competente para pronunciarse frente al asunto específico objeto de apelación, esto es la ejecución de los intereses legales obre las costas procesales de primera instancia; y si bien en los alegatos de segunda instancia las apoderadas judiciales de ambas partes, advierten la existencia de unos pagos y la constitución de un título judicial a favor el ejecutante DARÍO DE JESÚS CATAÑO QUINTERO, esta Sala no está facultada para revisar en consulta estos aspectos de la decisión, pues este grado jurisdiccional solo aplica frente a las sentencias, mas no en los autos interlocutorios como ocurre en el presente evento.

En consecuencia, la excepción de pago que se controvierte en apelación, solo será estudiada en relación con los intereses legales del art. 1617 del Código Civil, no obstante, como el juez de primer grado ordenó seguir adelante con la ejecución, las partes deberán estar atentas a la etapa de liquidación del crédito, para hacer valer los conceptos y sumas dinerarias que ya le hayan sido pagadas al ejecutante, tal y como se advirtió en el auto que libró mandamiento de pago de fecha 29 de agosto de 2017, donde se dispuso lo siguiente:

*“...Finalmente, se resalta que en el evento en que se acredite un pago parcial efectuado con posterioridad a la ejecutoria de la condena, se tendrá en cuenta como abono a la obligación al momento de liquidar el crédito...”.*

No obstante, para verificar si se realizó o no el pago a que hace referencia la Resolución N° GNR-76623 del 14 de marzo de 2016 en mención, antes de la liquidación del crédito, el juez de primer grado deberá hacer uso de sus facultades oficiosas en materia de pruebas para esclarecer tal hecho, en aras de la protección de los recursos públicos que maneja la demandada y evitar un posible doble pago de la condena.

### **Intereses legales del art. 1617 del Código Civil.**

La parte ejecutada se opone al mandamiento de pago por los intereses legales del art. 1617 del Código Civil sobre el valor de las costas procesales, indicando que dicha obligación no está contenida en las sentencias judiciales de primera y segunda instancia, que constituyen el título ejecutivo en la presente litis, veamos lo preceptuado en la citada normativa:

***“ARTICULO 1617. <INDEMNIZACION POR MORA EN OBLIGACIONES DE DINERO>. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:***

*1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.*

*El interés legal se fija en seis por ciento anual.*

*2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo.*

*3a.) Los intereses atrasados no producen interés.*

*4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas.”*

No obstante, considera la Sala que del contenido de este precepto legal, es claro que esta obligación de pago de intereses opera por ministerio de la ley, y por ende no se requiere que la misma se encuentre contenida en una sentencia o un

documento que haga las veces de título ejecutivo, la referida normativa es aplicable no solo a casos en los cuales exista un acuerdo de voluntades y mora por parte de los contratantes, sino en general a situaciones en que existan obligaciones e incumplimiento de las mismas por parte del acreedor, constituyendo para el caso, el pago de las costas y agencias en derecho una obligación de pagar una suma de dinero.

En este orden de ideas, encuentra la Sala que los intereses legales sobre las costas procesales, sobre los cuales se libró mandamiento de pago en auto del 18 de febrero de 2019, son procedentes, puesto que por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la SS, en materia laboral es aplicable lo dispuesto en el artículo 1617 del Código Civil, y así lo ha entendido la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 26 de junio de 2012, con radicación 41.846, veamos:

*“De otra parte y si bien le asiste razón a la censura en cuanto a su alusión respecto a la inexistencia de disposiciones del trabajo que determinen la causación de intereses en relación a las acreencias de tal carácter no podría entenderse que dentro del espíritu de amparo y protección que subyace en el derecho positivo laboral la ausencia de formulación legal permitiera que a las obligaciones no canceladas al trabajador no se les reconociera los réditos que el ordenamiento jurídico consagra a los créditos de distinto orden como resultado de las propias reglas de la economía en cuyo ámbito, obviamente, se encuentran los trabajadores.*

(...)

*No encuentra entonces la Sala reproche alguno en la aplicación del artículo 1617 del Código Civil que realizare el tribunal ante la ausencia de norma positiva de carácter laboral que lo facultara en virtud al implícito procedimiento analógico del que se sirvió a los fines de no menoscabar el derecho que declarara de la prestación pretendida.”*

Con base en lo anterior, considera la Sala procedente confirmar lo resuelto en este sentido por el juez de primer grado, al encontrarse ajustado a la normatividad vigente y la jurisprudencia nacional.

Finalmente, y en relación con la condena en costas procesales, considera la Sala, que no esta la oportunidad procesal para controvertir el valor de las costas y las agencias en derecho, pues de conformidad con el numeral 5° del art. 366 del

CGP, La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, además tratándose de un proceso ejecutivo, la liquidación del crédito y las costas deber regirse por las reglas establecidas en el art. 446 del CGP.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, y la improsperidad del recurso de apelación formulado por la apoderada judicial de COLPENSIONES, las costas procesales en esta instancia estarán a cargo de dicha entidad y a favor de la parte ejecutante, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$454.263.

## **V. D E C I S I Ó N**

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,


### **R E S U E L V E:**


**PRIMERO: CONFIRMAR** el auto objeto de apelación de origen y fecha conocidos, pero advirtiéndolo que aquellos pagos parciales efectuados a favor del ejecutante DARÍO DE JESÚS CATAÑO QUINTERO, deberán ser tenidos en cuenta como abono a la obligación al momento de liquidar el crédito, tal y como se indicó en el mismo auto que libró mandamiento de pago de fecha 29 de agosto de 2017, y, que en todo caso, el juez de primera instancia, antes de la liquidación del crédito, deberá hacer uso de sus facultades oficiosas en materia de pruebas para esclarecer si se realizó el pago a que hace referencia la Resolución N° GNR-76623 del 14 de marzo de 2016 que obra en el proceso, por lo señalado en la parte motiva.

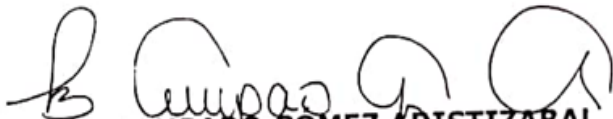
**SEGUNDO:** COSTAS en esta instancia a cargo de la parte ejecutada y a favor de la parte ejecutante, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de \$454.263.

**TERCERO:** Se ordena notificar lo resuelto en estados virtuales y la devolución del expediente al Juzgado de origen.

**Los Magistrados:**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° 102 del 15 de junio de 2021.

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>